

| | |
|----------------|--|
| Medio | El Mercurio |
| Fecha | 14-12-2011 |
| Mención | Editorial de Jorge Rodríguez Grossi, decano de la Facultad de Economía y Negocios, se refiere a la comisión asesora presidencial para la libre competencia, de la cual él forma parte. |

Comisión Asesora Presidencial Pro Competencia

“...la consolidación de una economía social de mercado en Chile obliga a promover buenas políticas económicas, pero no basta. También es imperativo generar confianza...”.

JORGE RODRÍGUEZ GROSSI

Decano Facultad Economía y Negocios
Universidad Alberto Hurtado

El valor que puede tener la Comisión Asesora Presidencial Pro Competencia recién creada puede ir más allá de sólo generar cambios de eficiencia en nuestra economía. Las fuertes manifestaciones sociales durante este año, sumadas al escandaloso comportamiento descubierto en La Polar, más denuncias de colusión de una importante industria alimentaria y otras situaciones, están reflejando una debilidad política de la economía chilena que contrasta con sus fortalezas adquiridas a lo largo de las últimas tres décadas.



Esta flaqueza tiene que ver con una creciente desconfianza de la población en la equidad de las relaciones económicas, no sólo porque se descubren abusos (las nuevas instituciones pro competencia permiten descubrirlos), sino porque los castigos parecen mínimos comparados con los vigentes respecto de otros delitos. Además, porque aunque prácticamente todos los chilenos gozan de un sustancial mejor nivel de vida gracias al crecimiento y políticas sociales, la sensación de que unos po-

cos van lejos ganándoles a los demás despierta una natural pregunta de por qué no pueden todos andar más rápido y holgados en cuanto a ingresos y gastos personales. De allí el respaldo masivo de los apoderados a las protestas estudiantiles, porque, entre otros temas, allí se peleaba por reasignaciones de recursos financieros.

La economía social de mercado que hemos construido es mucho más que puro mercado o pura economía. Es un sistema social que obviamente asume que el mercado es la herramienta económica más eficiente, pero que debe servir al progreso y a la armonía social, junto al libre ejercicio democrático. Es un conjunto de elementos y principios cuyo desafío es funcionar integralmente bien. Entonces, socialmente no es suficiente con que la economía crezca rápido, con baja inflación, con buenas reservas internacionales, amplio comercio exterior y mucha competencia. Requiere, además, que la comunidad respalde el funcionamiento económico. Y este apoyo político demanda la construcción de varias confianzas: primero, la de que a todos se retribuye equitativamente sus esfuerzos y, segundo, que las violaciones a las reglas básicas de la competencia y delitos económicos se castigan ejemplarmente.

No cabe duda de que el fuerte renacer del tema tributario y su reforma tiene que ver con una necesidad objetiva de mayor financiamiento para afrontar mayores de-

mandas sociales en un país que va creciendo, pero no se puede desconocer que también está ligado a la necesidad de convencer a la sociedad chilena de que los que más ganan paguen la mayor parte de los costos públicos. Constituye una magna tarea para la clase política el conciliar la necesidad de rigor técnico en las reformas con la de transparentar el carácter redistributivo del conjunto tributación-gasto público.

En cuanto al tema de las colusiones y comportamientos fraudulentos, también es necesario aplicar el máximo rigor técnico, pero junto a ello también revisar sin contemplaciones que los castigos económicos y penales guarden proporcionalidad con los que se aplican en otros casos delictuales claramente de menor impacto social. La generalizada percepción de que estas violaciones perpetradas por personas con poder económico no reciben sanciones justas alimenta la desconfianza en el sistema social.

En suma, la consolidación de una economía social de mercado en Chile obliga a promover buenas políticas económicas, pero no basta. También es imperativo generar confianza, primero, en que el Estado redistribuye los beneficios ayudando cada vez más a los que han estado históricamente más postergados y, segundo, en que quienes violan las normas de honestidad y de una limpia competencia son castigados en forma ejemplar.